Sección latinoamericana

EL SALVADOR

1977, un año crítico

Los salvadoreños se vieron afectados en 1977 por una situación política que día tras día adquirió los rasgos de una crisis de amplias proporciones. Entre los elementos que configuraron esa difícil coyuntura destacan, en primer término, las elecciones presidenciales, celebradas el 20 de febrero de 1977.

Los candidatos fueron el coronel retirado Ernesto Claramount, de la Unión Nacional Opositora (UNO) —coalición de tres partidos democráticos y una agrupación de militares retirados—, y Carlos Humberto Romero, del Partido de Conciliación Nacional (PCN).

El PCN fue creado por las fuerzas armadas después del golpe de Estado de 1962. En la actualidad toda la estructura del gobierno corresponde a este partido, pues detenta el Poder Ejecutivo y controla los 58 escaños de la Asamblea Legislativa y las 361 alcaldías del país. Además, el PCN ha llevado al poder a los últimos cuatro mandatarios, los militares Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y al actual presidente Carlos Humberto Romero, es decir, ha conservado el poder durante los últimos 16 años.

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifieste.

Ahora bien, a diferencia de los anteriores procesos electorales —excepto el de 1972, cuando la UNO dijo que el triunfo de su candidato había sido escamoteado por medio del fraude electoral—, los comicios de 1977 tuvieron un carácter excepcional: no sólo se trataba de unas elecciones más, sino —como lo afirmaron algunos especialistas— el pueblo salvadoreño "concurrió a las urnas deseoso de un cambio, a sabiendas de que su lucha significaba la liquidación del régimen reaccionario y un notable esfuerzo por impedir la instauración del fascismo en el país".[1]

Los dos candidatos a la presidencia tenían diferencias sensibles, tanto en lo que atañe a su concepción política cuanto en la forma de intentar la solución de los graves problemas que obstruyen el desarrollo del país centroamericano más pequeño. Un somero análisis de los aspectos de mayor relevancia de los programas de gobierno de cada candidato puede contribuir a que se comprenda la importancia concedida a esa contienda electoral, así como los acontecimientos que la precedieron y la sucedieron.[2]

1. Véase Lilian Jiménez, "La actual crisis de El Salvador es producto de su pasado histórico", en *Excélsior*, México, 28 de junio de 1977, así como *Quarterly Economic Review:* "Guatemala, El Salvador, Honduras", núm. 3, Londres, 1977, y *Latin American Political Report*, varios números, Londres, 1977.

2. Los datos de los programas de gobierno de la UNO y del PCN fueron tomados de *Estudios Centroamericanos, ECA*, núm. 341, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, marzo de 1977.

Los programas de los candidatos

Para la UNO el país presenta, desde hace varios decenios, una crisis estructural que afecta gravemente su vida económica, social y política. Entre los rasgos más característicos de esa crisis, destacan los siguientes:

- La agricultura tiene una enorme importancia para la economía nacional. El café, el algodón y la caña de azúcar representan más de 50% del valor total de las exportaciones. En el campo vive 60% de la población salvadoreña y la agricultura ocupa a más de la mitad de la población económicamente activa. Sin embargo, un grupo oligárquico de sólo 800 propietarios tiene en su poder casi 35% de las tierras cultivables del país y controla el aparato financiero, las principales obras de infraestructura rural y las exportaciones agrícolas. En el polo opuesto, más de 400 000 familias campesinas carecen de tierra o poseen parcelas apenas suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia. Entre estos dos grupos, unos 50 000 agricultores están considerados, como pequeños y medianos propietarios.

- La UNO señala que la política industrial aplicada por los gobiernos del PCN en los últimos tres lustros, orientada hacia la sustitución de importaciones, es un rotundo fracaso, pues el sector manufacturero ha sido incapaz de absorber el desempleo rural y de propiciar cambios sustanciales en la estructura social. A estas deficiencias —señalan los

opositores— hay que agregar la presencia de monopolios y oligopolios situados en las ramas industriales clave, aliados con las empresas transnacionales, que ha obstaculizado y deformado el desarrollo industrial del país. El progresivo deterioro del Mercado Común Centroamericano (MCCA), que paralizó a las pequeñas y medianas industrias, ha contribuido al fracaso de la política de industrialización. El resultado es una mayor dependencia, el cierre de numerosas plantas industriales, la subutilización de la capacidad instalada, el aumento del desempleo urbano y la disminución de la capacidad de exportar a países de fuera del área centroamericana.

• En cuanto a la esfera social, el programa de la UNO señala la ausencia de una política orientada a superar las graves carencias en la asistencia médica, en la atención a la maternidad y a la infancia y la aguda escasez de viviendas y escuelas, etc. A esas necesidades hay que añadir el problema del desempleo y del subempleo, los bajos salarios y el alza en el costo de la vida, que durante el lapso 1972-1977 casi se triplicó.

• En lo referente a la esfera política, el programa de la oposición dice que la enorme concentración de riquezas en unas cuantas manos (a la oligarquía salvadoreña se la conoce con el nombre de las "14 familias") y la constante negación de la democracia, han producido una extrema centralización del poder político, por lo cual la mayoría de los salvadoreños está marginada de las decisiones que rigen el destino de su país.

Para solucionar esta situación, la UNO postuló reorientar el papel del Estado, fortaleciéndolo política y económicamente, para convertirlo en una sólida base capaz de poner en marcha un proceso de desarrollo socioeconómico, acelerado y autosostenido, en el que participen todos los sectores sociales del país. Asimismo, señaló su oposición a caer en formas estatistas, por lo que reconoció una importante función social de la propiedad y la empresa privada. Al mismo tiempo, mientras en el programa se coloca al capital privado salvadoreño en condiciones de privilegio, se restringen las facilidades otorgadas al capital foráneo.

El programa de gobierno preveía planificar el desarrollo económico sobre la base del máximo aprovechamiento de los recursos nacionales, el crecimiento acelerado de la producción y la productividad, la creación masiva de empleos y la justa distribución del ingreso nacional, por medio de una política salarial que tenga en cuenta el proceso inflacionario que afecta al país.

En lo relativo al sector agrícola, la UNO propuso realizar una verdadera reforma agraria, que consistiría en modernizar la estructura de la tenencia de la tierra, a fin de dar un mayor dinamismo a la producción agrícola. Para ello sería necesario organizar a los campesinos, asalariados agrícolas y pequeños y medianos agricultores, como forma de garantizar su participación directa en la reforma.

El cumplimiento de estos proyectos exige la realización de varias reformas, también contenidas en el programa de la UNO, tales como la fiscal, la tributaria, la de política financiera y la de la política social, a fin de hacerlas armónicas con los requirimientos mencionados.

Si bien este programa no va más allá de intentar la modernización del país, en el marco del capitalismo contemporáneo, algunos "politólogos" de la oligarquía salvadoreña señalaron que su fin era llevar el comunismo a El Salvador, por lo que desataron una feroz campaña en los medios de comunicación social.

El PCN, por su parte, afirmó que el país "ha alcanzado un amplio desarrollo económico y social que debe ser fortalecido y superado con márgenes suficientes para asegurar la estabilización nacional por medio de la unidad de la familia. . ., cortando antagonismos aferrados a móviles egoístas y solidificando la conciencia y la mística de patria".

El PCN consideró que la evolución del país no se ha llevado a cabo con el mismo impulso en todos los sectores porque su propósito ha sido lograr "una franca salida de [la] situación de subdesarrollo".

El programa general de gobierno del PCN fue concebido desde el punto de vista de una "posición humanista, que forme en cada hombre dos actitudes: la voluntad de luchar sin descanso hacia la perfección, y la certeza de que la perfección no se puede alcanzar, pero para hacerlo tiene que desarrollar y fortalecer permanentemente su inquietud y su acción creadora".

El programa establece que el régimen político debe ser democrático, afirmando que "no hay libertad sin responsabilidad, y toda responsabilidad se mide y se ejerce con relación a una ética".

Con respecto a la modernización de la sociedad, la plataforma del PCN fijó una serie de objetivos, entre los que cabe mencionar los siguientes:

• En la agricultura, lograr "mayores ingresos para todos los integrantes del sector; mayor diversificación de la explotación agrícola; mayor participación en el consumo de alimentos y métodos de comercialización agrícola ventajosa; mayor rendimiento por hectárea; incorporación de nuevas zonas de explotación; acceso de pequeñas y medianas [empresas] a la propiedad y posesión de la tierra y elevación de la condición del trabajador del campo".

• En la industria: "producción masiva de productos; explotación de nuevos mercados; utilización y aprovechamiento de los nuevos inventos de la tecnología; fomento y crecimiento de las industrias que utilicen materia prima nacional; descentralización industrial; tecnificación de la mano de obra; desarrollo de las industrias básicas y pesadas".

• En el comercio y los servicios: "distribución masiva para bajar los costos; establecimiento de nuevos centros comerciales de mayoreo; control efectivo de normas y calidades; desarrollo eficiente de los servicios de transporte; promoción y penetración de nuevos mercados; participación del área rural en el consumo masivo de productos nacionales; desarrollo del comercio de exportación".

En cuanto a los problemas sociales como educación, salud y vivienda, el PCN señaló la necesidad de crear nuevas universidades e impulsar la educación de adultos; la creación de una amplia red hospitalaria a nivel nacional; el desarrollo de la seguridad social privada y el impulso de programas preventivos de salud; la aplicación de una política integral de la vivienda y la creación de nuevos centros urbanos y rurales. Además, estableció un amplio y ambicioso programa de obras viales para el período 1977-1982, entre las que destacan varias carreteras, caminos rurales, aeropuertos e instalaciones portuarias.

Las elecciones y sus secuelas

Para quienes siguieron de cerca el proceso electoral, los resultados no fueron sorpresivos. Según la opinión de diversos observadores, ante la muy real posibilidad de que la UNO obtuviera el triunfo, el PCN manipuló —con apoyo de los grupos paramilitares del gobierno— los resultados de la votación popular. Por ejemplo, el periódico nicaragüense *La Prensa*, en su edición del 21 de febrero, informó de una anécdota, a la que calificó de tragicómica: el reportero que envió para informar sobre las elecciones recibió, una semana antes de los comicios, un programa oficial de actividades, que incluía una entrevista con el presidente "democráticamente" electo, general Carlos Humberto Romero. Dicho diario también publicó diversas fotografías en las cuales los miembros del PCN aparecen capturando urnas y manipulando los votos, bajo la protección de los miembros de Orden, un grupo paramilitar que se encargó de impedir que estuvieran presentes en las casillas los observadores de la UNO.

Al conocerse el triunfo del candidato del PCN, los dirigentes de la coalición opositora denunciaron el fraude y miles de personas se manifestaron en la plaza principal de San Salvador contra los resultados oficiales. La protesta dio lugar a que intervinieran la fuerza pública y el ejército, iniciándose así una de las represiones políticas más cruentas de la historia reciente del país. En efecto, de acuerdo con los datos de una publicación londinense, la represión dejó un saldo de varios centenares de muertos, heridos y desaparecidos.[3] Ernesto Claramount y los principales dirigentes de la UNO debieron asilarse en embajadas y en países vecinos, dado el riesgo que significaba que permanecieran en el país.

Días después de las elecciones, un asesor del candidato opositor, asilado en una embajada, declaró que "si el general Carlos Humberto Romero, presidente electo de El Salvador, asume el poder el próximo mes de julio, el golpe de Estado es inminente, pues ya estamos cansados de la dictadura militar que ha prevalecido por más de cuatro décadas en el país".

A su vez, un destacado dirigente de la UNO, exiliado en México, señaló que su partido fue víctima "de la imposición de la oligarquía salvadoreña que manipula al gobierno del presidente Arturo Armando Molina".

Otros sectores de la sociedad salvadoreña también se sumaron a la indignación popular y reclamaron el cese de la violencia política. Este fue el caso de la Iglesia católica. En efecto, un representante del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal señaló, en un boletín de circulación extensa, que después de las elecciones el ambiente represivo recrudeció en el país y que incluso había alcanzado a la Iglesia. Por su parte, el Arzobispado salvadoreño, en un boletín de prensa fechado el 7 de marzo de 1977, dijo que tres días antes un sacerdote de la parroquia de Aguilares fue atacado por 40 militares de la Guardia Nacional. Cinco días después el Arzobispado informó sobre el asesinato del sacerdote y de dos civiles (uno de ellos un niño de 15 años) que lo acompañaban.

Según el boletín eclesiástico, la causa que motivó la muerte del párroco de Aguilares fue "la intensa labor pastoral de tipo concientizador y profético ('sobre los derechos fundamentales de todo hombre') que desarrollaba en todos los ámbitos de su parroquia". Ante esta situación, el Arzobispo anunció la excomunión de los autores materiales e intelectuales del atentado, y anunció la creación de un comité que vigilará de manera permanente y crítica el desarrollo de la situación nacional, hecho que desató una feroz lucha entre el Estado y la Iglesia.[4] Según el sacerdote jesuita y legislador estadounidense Robert F. Drinan, en el primer semestre de 1977 un "escuadrón de la muerte", protegido por el Gobierno, por lo menos asesinó a dos religiosos. Además, en el mismo lapso, fueron expatriados otros ocho.[5]

Por su parte, el Centro Regional de Informaciones Ecuménicas (CRIE) señaló que la organización paramilitar Unión Guerrera Blanca (UGB) dio un plazo de 30 días para que la Compañía de Jesús abandone el país.[6] En el comunicado, fechado el 22 de junio, el grupo paramilitar indicó que todas las instalaciones pertenecientes a los jesuitas serían consideradas blancos militares.[7] El CRIE señaló, además, que de febrero a mayo de 1977 siete sacerdotes extranjeros tuvieron que buscar refugio en el exterior, a ocho más los expulsó el gobierno del general Molina, seis fueron asesinados, cinco detenidos y torturados y diez obligados a ocultarse para evitar ser arrestados. La violenta represión contra la Iglesia salvadoreña continúa pese a la enérgica protesta del Arzobispo de San Salvador y de la declaración de solidaridad del P. Arrupe y de los responsables de las cinco principales órdenes religiosas de Estados Unidos.

Al no encontrar canales políticos adecuados para expresarse y tratar de reorientar el curso de los acontecimientos, el descontento popular se canalizó hacia el movimiento guerrillero, fortaleciendo las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), organización político-militar que se formó en 1970.

La FPL adquirió una gran notoriedad a raíz del secuestro y posterior asesinato del canciller Alfredo Borgonovo, suceso que puso en riesgo la continuidad del gobierno de Arturo Armando Molina. Algunos observadores llegaron a señalar la posibilidad de que se constituyera un gobierno provisional, encargado de transmitir el poder al presidente electo. Sin embargo, los voceros de las fuerzas armadas negaron rotundamente esa especulación.

El 1o. de julio de 1977, en medio de extremas medidas de seguridad, el general Carlos Humberto Romero tomó posesión como presidente de El Salvador. Ante la Asamblea Legislativa y frente a las representaciones diplomáticas de 46 países, el nuevo Presidente hizo un llamado a todo el pueblo para olvidar rencores y volver al camino de la concordia. Señaló que "las fuerzas armadas, conscientes de la situación que vive el país y por estar instituidas para mantener el orden público y garantizar los derechos constitucionales, han respondido y continuarán respondiendo al cumplimiento legítimo de su deber".

Carlos Humberto Romero finalizó su mensaje invocando "a Dios Todopodero-

3. Véase *Quarterly Economic Review*, op. cit.

4. Véase "El Salvador, guerra a muerte a los jesuitas", en *Proceso*, núm. 40, México, 9 de agosto de 1977, p. 44.

5. Véase *El Heraldo de México*, México, 16 de enero de 1978.

6. Véase *Proceso*, núm. 39, México, 1 de agosto de 1977, p. 34.

7. Véase Agence Latino-Américaine d'Information, boletín núm. 16, Montreal, Canadá, 30 de junio de 1977.

so para que ilumine nuestro pensamiento y conduzca nuestros pasos, y que la obra que hoy iniciamos sea de progreso integral para la República de El Salvador, con el deseo de vivir con honestidad, paz y trabajo".[8]

No obstante, el clima de inconformidad popular fue en aumento. Así, a finales de septiembre todos los cuerpos militares y de seguridad fueron acuartelados por la nueva serie de actos terroristas, entre los que destacó la ocupación de 16 radiodifusoras por integrantes de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, quienes difundieron un amplio mensaje político. Posteriormente, los miembros del grupo denominado Bloque Revolucionario también ocuparon el Ministerio del Trabajo y retuvieron a 200 rehenes durante más de 24 horas, para "hacer prevalecer las reivindicaciones de la clase obrera del país." En esta ocasión el Arzobispo de San Salvador fue el mediador entre las autoridades y los insurrectos.[9]

Rescoldos de la "guerra del futbol"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador anunció, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a fines de noviembre su país y Honduras pusieron en marcha un plan para dar fin al conflicto iniciado en 1969, con la mal llamada "guerra del futbol".

El canciller hondureño, por su parte, señaló que "se abren reales perspectivas de paz para una región de nuestro continente", y agregó que este nuevo esfuerzo por solucionar el conflicto fronterizo "va acompañado de una indiscutible autoridad política de solucionar definitivamente el conflicto aún pendiente entre las repúblicas de El Salvador y Honduras". Para mediar en estas negociaciones, se designó al jurista peruano José Luis Bustamente Rivero, expresidente de la Corte Internacional de Justicia.

Empero, el optimismo de los cancilleres se desdibujó cuando el Ministerio salvadoreño de Relaciones Exteriores denunció que tropas hondureñas cruzaron el 22 de noviembre la frontera y habían hecho fuego de artillería sobre la localidad de Jabonetas, en el sector noroccidental salvadoreño. El comunicado añadió que esta incursión de tropas constituye una violación a su territorio, y advirtió que "el gobierno dará todos los pasos necesarios para defender la soberanía de la República y la integridad de su territorio".[10]□

8. *El Universal*, México, 2 de julio de 1977.

9. *Excélsior*, México, 22 de septiembre de 1977.

10. *Excélsior*, México, 23 de noviembre de 1977.

recuento latinoamericano

Asuntos generales

Visita de los reyes de España a Centroamérica

Del 10 al 17 de septiembre último los reyes de España realizaron una visita oficial a Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Venezuela.

El Jefe del Estado español suscribió varios acuerdos de orden cultural, técnico y económico. Destacan los contratos con Venezuela, por valor de 1 600 millones de dólares, para la reconstrucción de la red ferroviaria, la creación de plantas industriales, etc. Con Guatemala se acordó modernizar el transporte ferroviario y crear una red comercial. En el comunicado final suscrito con este último país se incluyeron declaraciones de apoyo mutuo a las reivindicaciones territoriales sobre Belice y el Peñón de Gibraltar, solidaridad que ratificó el rey Juan Carlos en su alocución ante el Parlamento guatemalteco. Esta declaración dio origen a una nota de la Cancillería de México solicitando el esclarecimiento del texto.

Vance en América Latina

Del 20 al 23 de noviembre de 1977 el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, realizó una rápida visita a las capitales de Puerto Rico, Argentina, Brasil y Venezuela.

Durante la escala en San Juan de Puerto Rico, el Gobernador manifestó a Vance la oposición de su Gobierno a las actividades de la marina estadounidense en la isla Vieques. Al mismo tiempo solicitó que Estados Unidos mantenga la política proteccionista al ron puertorriqueño, ya que una revisión de la actual tarifa arancelaria afectaría la exportación del destilado de la isla.

En Argentina las partes manifestaron su interés en aumentar su cooperación en investigaciones y transferencia de tecnología en el campo de la energía nuclear. Estados Unidos se comprometió a proveer de agua pesada al reactor que Argentina construirá en Perú. Por su parte, Argentina declaró su intención de ratificar el Tratado de Tlalelolco de desnuclearización regional.

En Brasil, las partes reconocieron "la ausencia de convergencia" en sus opiniones sobre energía nuclear, pese a que Estados Unidos matizó su planteamiento al señalar que no se oponía al acuerdo nuclear germano-brasileño, pero que sí tenía preocupación por el empleo del procedimiento "purex" para el tratamiento de combustible nuclear, pues lo considera peligroso.

Con el Presidente de Venezuela, Vance insistió en el planteamiento de su Gobierno de congelar los precios del petróleo, tema central de la L Conferencia Ordinaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se celebró en Caracas en la segunda quincena de diciembre.

Visita del Presidente de Israel a países latinoamericanos

Del 22 de noviembre al 7 de diciembre del pasado año, Ephraim Katzir, presidente de Israel, visitó México, Costa Rica y Guatemala, con el propósito formal "de incrementar las relaciones científicas, tecnológicas, culturales y econó-

micas". Al término de su estancia en Guatemala, el Presidente de este país informó que entre los temas discutidos con Katzir estuvo el del acuerdo sobre el aprovisionamiento de armas israelíes, suscrito en 1974.

El mandatario guatemalteco declaró que su país ya había recibido 90% de los envíos estipulados en dicho acuerdo y solicitó nuevas ventas. Añadió que tales adquisiciones de pertrechos "dependerán del resultado de las conversaciones sobre el futuro de la colonia británica de Belice" (*El Día*, México, 8 de diciembre de 1977, p. 12).

Sin embargo a su llegada a México, el Presidente de Israel dijo que no había discutido problemas de cooperación militar con su colega guatemalteco.

Créditos de la CEE a países latinoamericanos

El 16 de diciembre último, la Comunidad Económica Europea (CEE) suscribió créditos por 12 millones de dólares con varios países y organismos latinoamericanos. Ese monto representa 22% de los créditos de ayuda técnica y financiera que la CEE concede a los países subdesarrollados. La distribución de los créditos es la siguiente: Bolivia, 2.2 millones; Honduras, 1.3 millones; Banco Centroamericano de Integración Económica, 2.2 millones; Instituto de Nutrición de América Central, 2.2 millones, y Pacto Andino, 4.1 millones.□

Productos básicos

Conferencia azucarera y proteccionismo estadounidense

Del 12 de septiembre al 7 de octubre de 1977 se reunió en Ginebra, Suiza, la Conferencia Mundial del Azúcar, auspiciada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En la reunión se aprobó un proyecto de convenio internacional para regular el mercado mundial de este producto de 1978 a 1982, que fue suscrito en el mes de diciembre.

Las importaciones mundiales de azúcar son de 16 millones de toneladas frente a disponibilidades de 20 millones. Esto determina que el precio promedio internacional (8 centavos de dólar por libra en la actualidad) generalmente sea inferior a su costo de producción. En el nuevo convenio se estableció un precio mínimo de 11 centavos de dólar por libra y un máximo de 21 centavos; reservas reguladoras de 2.5 millones de toneladas, financiadas por una cuota de 0.25 centavos de dólar por libra, que pagarán los países exportadores e importadores, y cuotas de exportación para evitar la competencia entre los productores, especialmente entre los más importantes: Cuba, Brasil y Australia.

En respuesta a los acuerdos de esta Conferencia, el Gobierno de Estados Unidos dictó medidas proteccionistas acordes con su nueva Ley Agrícola, que garantiza a los productores estadounidenses un precio mínimo de 13 centavos por libra. Las nuevas medidas son dos: imposición de un arancel de 3.3 centavos de dólar por libra al azúcar importada y aumento de 9 décimas de centavo en los derechos aduaneros, con lo cual éstos llegan a 2.81 centavos de dólar por libra. Ambas comenzaron a aplicarse el 1 de enero de 1978.

De acuerdo con los expertos, los países latinoamericanos que exportan azúcar a Estados Unidos dejarán de percibir anualmente 55 millones de dólares por cada centavo que aumente el arancel azucarero estadounidense.

Precio mínimo a la bauxita

La Asociación Internacional de la Bauxita (AIB) celebró su Cuarta Reunión Ministerial en Kingston, Jamaica, el 2 de diciembre último. Los miembros de la AIB (Australia, Guinea, Jamaica, Guyana, Ghana, Haití, la República Dominicana, Indonesia, Sierra Leona, Surinam y Yugoslavia) poseen 67% de las reservas mundiales de bauxita. Se acordó un precio mínimo de 24 dólares por tonelada métrica exportada a Estados Unidos, decisión que algunos delegados calificaron como "un logro sin precedentes para los países exportadores", que habían sido presionados por las empresas transnacionales con el fin de impedir un acuerdo de este tipo.

Reunión de países productores de cobre

Del 5 al 7 de diciembre del último año se reunió en Yakarta, Indonesia, la XII Conferencia de Nivel Ministerial del Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, integrado por Chile, Indonesia, Perú, Zaire y Zambia, como países afiliados, y Australia, Papúa-Nueva Guinea y Yugoslavia, como miembros asociados.

La XII Conferencia no llegó a un acuerdo para equilibrar la oferta del metal (con el fin de estabilizar su precio internacional), ya que Chile se opuso a reducir su oferta.

Incierta perspectiva para el café

Del 13 al 20 de diciembre de 1977 se reunió en Río de Janeiro el Consejo Ejecutivo de la Organización Internacional del Café, que discutió la iniciativa de los exportadores de fijar al producto precios mínimos y máximos en 1978.

Brasil, Angola y México propusieron precios de 2.20 a 2.50 dólares por libra de café, los cuales fueron rechazados por los representantes del bloque de países consumidores. Con base en estadísticas propias, éstos adujeron que la escasez del producto, iniciada en 1975, terminará en 1978, ya que la producción crecerá hasta normalizar la oferta mundial y los precios tenderán a bajar. La reunión concluyó sin llegar a ningún acuerdo respecto al precio.

De los 20 países cafeticultores, 13 son de América Latina. Brasil, Colombia, El Salvador, México y Costa de Marfil producen 57% de las exportaciones mundiales.□

Belice

Apoyo de la ONU

El 17 de noviembre último, la Comisión Encargada de los Asuntos Coloniales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por 115 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, un proyecto de resolución en el que se reafirma el derecho inalienable del pueblo beliceño a la autodeterminación y la independencia.

La Comisión instó a Inglaterra para que actúe en estrecha colaboración con los gobiernos de Belice y Guatemala, a fin de que sus negociaciones concluyan antes del próximo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Reunión regional de solidaridad

Los días 9 y 10 de diciembre de 1977

se celebró en Kingston, Jamaica, una reunión a nivel de ministros de Barbados, Belice, Guyana, Granada, Jamaica, México, Panamá, Surinam y Venezuela.

Las resoluciones del encuentro respaldan el derecho de Belice a la independencia y a participar en todas las negociaciones relativas a este tema. Los países representados en Kingston se manifestaron partidarios de una solución negociada que no ponga en riesgo la integridad territorial de la colonia británica.□

Bermudas

Agudos conflictos sociales

Durante las tres primeras noches de diciembre pasado numerosos grupos de jóvenes protestaron violentamente contra la ejecución de dos líderes de la organización de las Boinas Negras, que lucha por independizar a ese archipiélago de la Gran Bretaña. Los dos líderes fueron acusados de haber cometido asesinatos políticos.

El Gobierno decretó el día 4 el estado de emergencia y solicitó el envío de un contingente militar británico que desembarcó esa misma fecha en Hamilton.

Esa decisión fue criticada por varios diputados laboristas británicos y por distintos sectores de la opinión pública en los países del Caribe, pues la consideraron como un apoyo al gobierno local, que controla la mayoría parlamentaria gracias a un deficiente sistema electoral.□

Bolivia

Emigración sudafricana

El *Sunday Times* de Johanesburgo informó el 11 de diciembre de 1977 que 50 familias sudafricanas blancas emigrarán a Bolivia en febrero próximo. Este grupo será la avanzada de unas 30 000 familias de excolonos sudafricanos y rodesianos que en los próximos seis años se asentarán en el oriente boliviano, de acuerdo con un programa intergubernamental financiado por la República Federal de Alemania con 137 millones de dólares (*El Día*, México, 12 de diciembre de 1977, p. 11).

El programa, mantenido en secreto por el Gobierno de Bolivia, incluye la elaboración de proyectos para la fundación de dos ciudades de 100 000 habitantes en la zona oriental del país.

Esta decisión ha generado fuertes protestas entre los bolivianos debido a que de los 4.6 millones que poblaban ese país, un millón ha tenido que emigrar a los países vecinos en busca de trabajo. Causa también malestar que los futuros colonos sean, según se dice, racistas y segregacionistas.□

Brasil

Nombramiento del futuro Presidente

Las agencias de noticias brasileñas confirmaron que el general Joao Baptista Figueiredo será el sucesor, a partir de marzo de 1979, del actual presidente Ernesto Geisel. Asimismo, se indicó que el gobernador del Estado de Minas Gerais, Aureliano Chávez, será el próximo vicepresidente. Baptista Figueiredo es el actual jefe de los Servicios de Inteligencia Militar y uno de los "hombres duros" de las fuerzas armadas de Brasil.□

Colombia

Período constituyente con ruido de sables

El Parlamento de este país aprobó el 1 de diciembre de 1977 la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la separación de las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán, respectivamente, en febrero y junio de 1978. En el presente año concluye el llamado "acuerdo nacional", que en 1954 estableció la alternancia de los partidos liberal y conservador en la Presidencia de la República y la composición bipartidaria del gabinete, y cuyos fines eran consolidar el monopolio político de esos partidos y evitar las luchas intestinas. El fin del "acuerdo nacional" obliga a realizar reformas a las leyes básicas, por lo cual se convocará la Asamblea Constituyente.

Por otra parte, la orden gubernamental de retirar del servicio activo al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a partir del 2 de diciembre, suscitó aguda oposición de jefes militares en servicio y de 53 altos oficiales en reserva, que el 15 de diciembre protestaron públicamente por la aplicación de medidas disciplinarias en contra de distintos mandos: "Es necesario —dijeron— que la nación se entere de estos procedimientos que están minando y socavando gravemente el instrumento militar colombiano, poniendo en grave peligro las instituciones de la República".□

Cuba

Establecimiento de oficinas de interés y acuerdos sobre límites marítimos con Estados Unidos

El 1 de septiembre último, en actos simultáneos celebrados en La Habana y Washington, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos inauguraron sus respectivas "oficinas de interés", encargadas de mantener relaciones limitadas entre los dos países.

Los representantes de ambos gobiernos hicieron declaraciones separadas en torno a la importancia del suceso y señalaron los factores que limitan el establecimiento de relaciones diplomáticas normales. Terence Todman, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, ratificó las llamadas "condiciones" del gobierno del presidente Carter, relativas a los derechos humanos, particularmente al futuro de los delincuentes estadounidenses presos en Cuba, a la presencia de un contingente militar cubano en Africa y a la indemnización por las propiedades estadounidenses nacionalizadas por ese país.

El encargado cubano de la Oficina de Interés en Washington señaló que el levantamiento del bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba es el principal obstáculo para la normalización de las relaciones. Manifestó, asimismo, la disposición de su Gobierno "a analizar esas cuestiones que el Gobierno de Estados Unidos considera un conflicto existente entre nuestros dos países".

El 29 de septiembre, el presidente Fidel Castro ratificó que el levantamiento del bloqueo estadounidense es parte del proceso de normalizar relaciones, pero que éste será largo y lento, ya que existen numerosos problemas bilaterales, como la base militar de Guantánamo. Señaló que su país no indemnizará a Estados Unidos por la nacionalización de propiedades norteamericanas, porque los daños ocasionados a Cuba en 17 años de bloqueo y agresiones son mucho mayores que el valor de esos bienes.

El 16 de diciembre, los representantes de Cuba y de Estados Unidos dieron otro paso en la normalización de relaciones al firmar en Washington un acuerdo provisional por dos años, referente a las fronteras marítimas entre ambos países.

Según se anunció, el acuerdo será permanente si ambas partes lo ratifican en los términos de sus respectivas normas constitucionales.

Visita de Fidel Castro a Jamaica

Del 16 al 21 de octubre último, el comandante Fidel Castro visitó Jamaica, invitado por el primer ministro de este país, Michael Manley. El presidente Castro visitó empresas, conversó con diversas autoridades sociales, políticas y religiosas y participó en un multitudinario mitin en Montego Bay.□

Chile

La Junta Militar contra la ONU

El 16 de diciembre de 1977 la Asamblea General de la ONU aprobó por 96 votos en favor, 14 en contra y 25 abstenciones, una resolución de condena a la política de represión aplicada por el Gobierno de Chile. La resolución señala la "profunda indignación" de la Asamblea General ante el hecho de que "el pueblo chileno continúa siendo sometido a violaciones constantes y flagrantes de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales". De igual forma, la Asamblea General invitó a la Comisión de los Derechos del Hombre de la ONU a prorrogar el mandato a su grupo de trabajo que investiga la situación en Chile.

La iniciativa fue patrocinada por 25 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Soviética. De los países latinoamericanos 13 votaron en contra y dos se abstuvieron.

En respuesta a la Asamblea General, la Junta Militar chilena convocó un plebiscito nacional para manifestarse en pro o en contra de la resolución de la ONU. El voto contrario a la resolución se acompañaba de un texto de apoyo a la Junta Militar.

El plebiscito se realizó el 4 del presente sin permitir una acción abierta de las organizaciones políticas, sin padrón electoral y sin ningún control institucional que democráticamente diera fe de la legalidad del acto. Los partidos que integran la Unidad Popular y el Demócrata Cristiano, cuyos votos en las últimas elecciones de 1974 representaron la amplia mayoría del país, llamaron a la abstención y rechazo de la maniobra política.

Los resultados oficiales fueron: 75% de "sí", 20% de "no" y 5% de votos nulos. Empero, esas cifras no cambiaron la actitud de la opinión pública mundial, que desde la convocatoria del plebiscito vio en él una maniobra de Pinochet para conseguir algún apoyo interno. Numerosas declaraciones oficiales de distintos gobiernos, así como de partidos y personalidades, confirman el aislamiento internacional de la Junta Militar.

Pertrechado con los resultados del plebiscito, el Gobierno de Chile se dirigió al Secretario General de la ONU para demandarle la suspensión de las actividades del grupo de trabajo mencionado. El Secretario General de la ONU rechazó la petición.

Días más tarde (16 de enero) la policía chilena detuvo a un importante grupo de dirigentes de la democracia cristiana, con lo cual se confirma que el plebiscito no es el comienzo de una apertura política.□

Ecuador

Referéndum constitucional

El 15 del presente se realizó un referéndum nacional para decidir qué texto constitucional deberá regir la vida institucional de Ecuador a partir del próximo mes de julio. La Constitución de 1945, con reformas, obtuvo 33% de los votos; un nuevo texto constitucional, redactado por una comisión designada por el Gobierno militar, recibió 42%; los votos nulificados ascendieron a 25 por ciento.

La convocatoria al referéndum señaló que el voto era obligatorio para los alfabetizados mayores de 18 años; a los electores se les entregó un comprobante de haber votado, sin el cual no podrán tramitar asuntos administrativos de carácter público, lo que contribuyó a la nutrida votación.

La nueva Constitución otorga el derecho de voto a los analfabetos, establece un período presidencial de cinco años sin reelección, la creación de la Vicepresidencia de la República, de un Congreso unicameral y de un Tribunal de Garantías.

Una vez aprobado el texto constitucional se realizarán elecciones generales el 16 de julio próximo; de esta forma, Ecuador será el primer país en donde los militares desarrollistas entreguen el poder a los civiles.□

Jamaica

Aumentará el papel del sector público en los servicios turísticos

El 6 de octubre de 1977 el Gobierno jamaiquino informó que en fecha próxima adquirirá una parte de las nuevas instalaciones hoteleras (1 541 habitaciones). Con ello controlará 4 000 habitaciones, 70% del total. Cabe señalar que el ramo turístico ocupa el tercer renglón en los ingresos de divisas del país, aunque en los dos últimos años ha registrado una sensible disminución. Esta baja obedece sobre todo a la recesión económica de los países industrializados, principalmente de Estados Unidos (de donde proviene casi 80% de los visitantes), y a la competencia creciente de otras zonas turísticas del Caribe, al amparo de una modificación de las tarifas aéreas que ha sido desfavorable a Jamaica.

Acuerdo económico con la URSS

El 30 de noviembre representantes de Jamaica y la Unión Soviética firmaron un convenio de cooperación económica y científico-cultural. La URSS brindará asistencia técnica para la construcción de una planta de cemento, con capacidad para elaborar anualmente medio millón de toneladas; el acuerdo también prevé apoyo soviético para la prospección geológica de minerales, como cobre y níquel.□

Nicaragua

Asesinan al líder de la oposición

El 10 de enero cayó abatido en Managua, por ráfagas de ametralladora, Pedro Joaquín Chamorro, director del diario *La Prensa* y presidente de la Unión Democrática de Liberación, amplia coalición en la que participan los partidos de oposición a la familia Somoza.

Pedro Joaquín Chamorro era el más conocido representante de la oposición legal nicaragüense. Desde su periódico mantuvo una permanente oposición al régimen. En varias ocasiones acudió a los organismos de prensa de la región y a instituciones oficiales de distintos países para sostener la misma actitud.

Amplios sectores de la población nicaragüense manifestaron su repudio al crimen, y en los días siguientes a su asesinato se registraron numerosos actos de protesta.□

Panamá

Referéndum sobre los nuevos tratados

El 31 de octubre último el presidente de la República de Panamá, Demetrio B. Lakas, dio a conocer los resultados oficiales del referéndum sobre los tratados (uno sobre el Canal de Panamá y otro "Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y el Funcionamiento del Canal de Panamá"), celebrado el día 23 del mismo mes. Según los datos presentados, 506 805 panameños votaron a favor y 245 177 en contra.

Lakas señaló que el balance muestra "que el tratado no satisface al ciento por ciento nuestras patrióticas aspiraciones". Añadió que "un tercio de los votantes expresaron su impaciencia en tener que esperar 23 años antes de que Panamá asuma el control de la vía interoceánica" y que el referéndum mostró "la mayor participación de electores en nuestra historia".

Un mes antes del referéndum el Jefe del Gobierno, general Omar Torrijos, emprendió una gira por diez países de Europa, América y el Cercano Oriente, con el propósito de buscar respaldo mundial a los tratados. En Israel, meta principal del viaje, buscó el apoyo del Gobierno para que éste recomendara a los senadores estadounidenses de origen judío el voto favorable.

El 14 de octubre, en Washington, el general Torrijos y el presidente Carter emitieron una declaración conjunta que interpreta los tratados: "Panamá y Estados Unidos tienen la responsabilidad de asegurar que el Canal de Panamá permanezca abierto y seguro a los barcos de todas las nacionalidades. . . [por lo que] cada una de las naciones defenderá el Canal, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, contra cualquier amenaza al régimen de neutralidad y, consecuentemente, tendrá el derecho de actuar contra cualquier agresión o amenaza dirigida contra el Canal. . ."

"Esto no significa ni será interpretado como un derecho de intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá".□

Puerto Rico

Aumenta el desempleo

La prolongada huelga de estibadores de la costa este de Estados Unidos, del 30 de septiembre al 14 de noviembre de 1977, provocó el cierre de unas 60 fábricas en Puerto Rico y la cesantía de más de 30 000 trabajadores, con lo que el número de desempleados llegó a casi 200 000. La economía puertorriqueña sufrió pérdidas por varios cientos de millones de dólares y, según las autoridades, otros 130 000 empleados pueden ser despedidos en breve tiempo.□

Perú

Murió el general Velasco Alvarado

El 24 de diciembre último murió en Lima el expresidente Juan Velasco Alvarado, quien gobernó Perú del 3 de octubre de 1968 al 29 de agosto de 1975. En este período se inició un proceso de modernización que destruyó las bases económicas de la vieja oligarquía, recuperó para la nación los recursos naturales, creó un amplio sector económico de propiedad estatal y estableció nuevas formas de articulación y asociación con el capital transnacional. En el campo político se ampliaron las posibilidades de organización social y de participación de los sectores trabajadores.

En materia de política exterior, el gobierno del general Velasco Alvarado aplicó una línea totalmente nueva para su país: lo incorporó activamente al movimiento de los países no alineados; pugnó con realismo por el reconocimiento del carácter plural de los países latinoamericanos; restableció relaciones con Cuba; luchó por reformar al sistema regional; promovió nuevos principios, como el de seguridad económica, y alentó nuevos pasos en el proceso de integración de los países andinos.□

Surinam

Primera jornada electoral

El 31 de octubre último Surinam celebró la primera jornada electoral desde que se independizó de Holanda, el 25 de noviembre de 1975. Hubo más de 150 candidatos, en representación de los 13 partidos existentes. El Partido Nacional Surinamés, del primer ministro Henck Arron, obtuvo la victoria al asegurar 24 de los 39 escaños parlamentarios. Los restantes fueron para los candidatos de los Partidos Demócratas Unidos, encabezados por Jagernath Lachmon. Los demás partidos no obtuvieron representación en el Parlamento. Se calcula que a las urnas acudió sólo 65% de los 185 000 votantes potenciales.□

Uruguay

Ajuste del programa económico

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, los altos mandos militares y el Gobierno de Uruguay sesionaron en la turística localidad de Solís, para discutir en secreto las medidas de política económica de los próximos años. Entre ellas destacan las siguientes:

- Para reducir los costos en las empresas y elevar su eficiencia se reducirá en 30 000 el número de trabajadores ocupados.
- Habrá un proceso de gradual "desarancelización" de las importaciones.
- Con una inflación estimada en 52% en 1977, se aprobó un aumento general de salarios de 7% y un complemento de medio aguinaldo.

La reunión ratificó el programa político de institucionalización de una democracia "protegida", por lo cual en 1981 se convocarán elecciones generales con una sola candidatura presidencial, que previamente haya sido aceptada por los militares.□

Venezuela

Visita del Presidente a Brasil

Del 16 al 19 de noviembre, el presidente Carlos Andrés Pérez realizó una visita oficial a Brasil. El propósito fue ampliar las relaciones comerciales y financieras con ese país, así como acordar nuevas medidas para reprimir el contrabando de drogas y mercancías entre ambas naciones.□

Comercio Exterior, vol. 28, núm. 1,
México, enero de 1978, pp. 60-63

La política y las fluctuaciones económicas: una hipótesis para las economías latinoamericanas cerradas

ABEL BELTRAN DEL RIO*

"Si llega a suceder que la inversión pase más y más bajo el control directo del Gobierno, podemos esperar que el fenómeno del ciclo económico se modifique."

*Alvin H. Hansen***

Con el patrocinio del Banco Central de Venezuela y la colaboración del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas y de Wharton Econometric Forecasting Associates, Inc., de Pennsylvania, se celebró a fines del pasado octubre un simposio de proyecciones econométricas mundiales y latinoamericanas, en la ciudad de Caracas. En el simposio se presentaron proyecciones sobre la economía mundial en su conjunto (Lawrence R. Klein), la economía de Estados Unidos (F. Gerard Adams), la de los países socialistas en su conjunto, con especial importancia en la de la Unión Soviética (Peter Miovic), y las de las economías latinoamericanas: México (Abel Beltrán del Río), Brasil (Romualdo Roldán), Argentina (Eduardo Conesa), Perú (Iván Rivera y Javier Iguíñez), Centroamérica (Gabriel Siri), Venezuela (Pedro Palma), Chile (Andrés San Fuentes) y Colombia (Javier Fernández). Las proyecciones cubrieron desde uno hasta más de cinco años.

Aunque la naturaleza del simposio fue econométrica y abundante en proyecciones cuantitativas, detrás de ellas surgió una y otra vez el papel decisivo que desempeña el factor político. Este trasfondo de orden cualitativo, que puede reducirse a la noción de que la economía es parte de la política, se manifestó en diferentes grados y formas en la determinación de las perspectivas económicas que se presentaron.

La idea de que lo económico es parte de lo político no es nueva; data incluso del inicio del estudio de la política.[1] Además, es una noción tan obvia y simple que pudiera parecer estéril para utilizarla como hilo conductor de una reflexión sobre las cuantificaciones del simposio. No obstante, consideramos que su vigencia, así como la forma en que se ha manifestado en el pasado reciente y la manera en que probablemente lo hará, en las economías analizadas, en el futuro, resulta no sólo interesante sino también útil.

Al hacer hincapié en el efecto de lo político sobre lo económico no debe desconocerse la determinación inversa, de lo económico sobre lo político. En términos generales, ambos son fenómenos que se condicionan mutuamente. En la práctica, sin embargo, se observa que en los países con economías más independientes —por su tamaño y ahorros, su

* Director de Proyectos Latinoamericanos de Wharton Econometric Forecasting Associates, Inc. (Universidad de Pennsylvania), y responsable del Proyecto Diemex Wharton.

** *Business Cycle and National Income*, W.W. Norton, Nueva York, 1964, p. 508.

1. Aristóteles, siguiendo su método analítico de ir del todo a las partes, de la comunidad política a la familia, reconoce el arte económico como parte esencial de la administración familiar y estatal. Lo económico debe subordinarse a los fines de la familia y de la comunidad política. Véase *Política*, libro I.

mayor aislamiento del exterior y el mayor poder interno de sus gobernantes— lo político puede configurar a lo económico por períodos más largos que en los países con economías menos independientes. Pero aun en estos últimos la relación puede invertirse y entrar a una etapa en la que, en general, las consideraciones económicas predominen sobre las políticas. Normalmente esto sucede después de que las deficiencias o excesos de la etapa anterior se manifiestan claramente en el deterioro o en la falta de progreso del sistema económico.

En esta nota nos concentramos en las manifestaciones del principio en América Latina y concretamente en las economías mayores y más cerradas de la región: Argentina, Brasil, Chile y México. En ellas, la influencia de lo político en lo económico se observa con mayor claridad; no así en las economías menores y más abiertas al comercio y las finanzas exteriores (las centroamericanas), donde el fenómeno inverso parece prevalcer: la definición de lo político por lo económico. En estos casos, las medidas políticas desestabilizadoras de la economía no pueden sostenerse por largo tiempo, dada la rápida y significativa reacción de la balanza de pagos y la imposibilidad práctica de generar una inflación elevada.

Antes de entrar al caso latinoamericano conviene indicar que en los países más industrializados (la mayoría de los países de Europa occidental, Canadá y Estados Unidos) prácticamente existe consenso entre los expertos de que en general se han suavizado las fluctuaciones económicas a partir de la posguerra, o sea, que la amplitud de los ciclos ha disminuido gracias al conjunto keynesiano de instrumentos de manejo macroeconómico y a su uso anticíclico (compensatorio) por los gobiernos de esos países. Hay desde luego casos de excepción, como el de Inglaterra, donde los problemas recurrentes en la balanza de pagos (propios de una economía insular sin base exportadora suficiente) han generado una política económica de crecimiento en hitos (paresiga) que pudiera interpretarse como desestabilizadora. Pero aun en este caso también cabe la interpretación de que, sin esta política de expansión-contracción, el problema externo y las devaluaciones sucesivas de la libra esterlina hubieran sido mayores.[2] También se reconoce que la intervención de la política económica gubernamental ha permitido un crecimiento económico más alto que el que se hubiera producido sin dicha política. La consecuencia ha sido, desde luego, una mayor propensión inflacionaria, que contrasta con la del período entre las dos guerras, cuando la aplicación universal del patrón oro, combinada con tipos de cambio sobrevaluados —adoptados por consideraciones de prestigio nacional, especialmente en el caso de Inglaterra—, produjeron las propensiones deflacionarias que finalmente llevaron a abandonar el patrón oro.

En América Latina, en el período de la posguerra la historia económica de los países analizados ha sido diferente. En todos ellos hay signos de desestabilización, originada en los programas macroeconómicos aplicados. Abundan los casos de sobreestímulo, llevados al extremo hiperinflacionario. Los objetivos primordiales de estos programas normalmente han sido la modernización o industrialización y la modificación en la distribución del ingreso. Los instrumentos usados: el gasto público, el exceso de liquidez y la política salarial. Las consecuencias se han manifestado en el desequilibrio externo (déficit desproporcionados y endeudamiento externo), además de la elevación de los precios, incluyendo el tipo de cambio de la moneda.

Debe observarse que la pretensión ideal del programa económico de fungir como balancín anticíclico, tal y como se presenta en los libros de texto, no se ha dado en la práctica latinoamericana. En teoría, las políticas fiscal y monetaria deben utilizarse para suavizar las fluctuaciones económicas, expandiendo la economía cuando se avecina una contracción y contrayéndola cuando se avizora una expansión.

Aunque, como ya indicamos, hay dudas de que siempre haya sucedido así en los países económicamente más avanzados, la menor amplitud y duración de los ciclos económicos de la posguerra parecen indicar que, en general, los programas económicos han sido compensatorios o anticíclicos o que, al menos, no han resultado altamente desestabilizadores. Recuérdese que los regímenes políticos de los países desarrollados, con su parlamentarismo, impiden introducir o mantener programas económicos claramente desestabilizadores.[3]

No ha sido así en los países latinoamericanos. Las demandas y presiones del desarrollo imitativo, aunadas a idearios políticos ambiciosos y al mayor poder o duración del grupo gobernante, todo dentro del marco del atraso de sectores clave, han llevado a repetir la utilización del programa de coyuntura en una forma inmoderadamente expansionista. El resultado ha sido siempre el mismo: acentuamiento de las fluctuaciones económicas, generación de inflación o hiperinflación y serios desequilibrios externos.[4] Lo que debería ser una medicina coyuntural se ha aplicado como medicamento estructural. En consecuencia, la subsecuente necesidad de aplicar prolongados programas de estabilización, que son políticamente conflictivos, ha endurecido (o dividido) a los gobiernos de índole democrática, o han propiciado que, para llevarlos adelante, surjan gobiernos autoritarios, no sujetos a cambios electorales. Donde esto no ha sucedido, la estabilización no se ha logrado satisfactoriamente. En estos casos se han puesto en vigor medidas que posibiliten vivir en un clima de alta inflación, como son los casos ya tradicionales de Argentina, Brasil y Chile.

2. Erik Lundberg, *Instability and Economic Growth*, Yale University Press, New Haven, 1968, pp. 190-191.

3. Véase Walter W. Heller, "CED's Stabilizing Budget Policy After Ten Years", en R.A. Gordon y L.R. Klein (eds.), *Readings in Business Cycles*, Irwin, Homewood, Ill., 1965, pp. 698-703.

4. Usualmente la operación típica ha consistido en tratar de redistribuir el ingreso o de eliminar cuellos de botella productivos, en un corto plazo, cuando ambos son problemas de mediano y largo plazos.

Dos aspectos de lo político, que afloraron intermitentemente durante el simposio, parecen tener un especial efecto sobre lo económico: *1)* el tipo de gobierno y el grado de poder o dominio que ejerce el grupo gobernante sobre los gobernados, y *2)* la filosofía o ideología política y, consecuentemente, el plan económico de los gobernantes. Aunque sea frecuente la combinación de dos factores, digamos autoritarismo y antipopulismo, todos los casos parecen darse en la práctica.

El poder de decisión y ejecución de los gobernantes, según el tipo de gobierno que exista, resulta determinante en la definición de la naturaleza del plan económico, de sus objetivos e instrumentos y de la prontitud y eficiencia con que se pueda llevar a efecto. Los planes que puede ejecutar una junta castrense no los puede aplicar un gobierno democrático; los planes que puede realizar un gobierno inversionista (economía mixta) no los puede llevar a cabo un gobierno consumidor (economía privada). Por otra parte, la filosofía política del gobierno en turno determina, en ocasiones, qué esfuerzos debe hacer el propio gobierno para ampliar su autoridad, a fin de realizar su plan. El fracaso del plan económico, y de la filosofía que lo sustenta, con frecuencia también es el origen de un cambio en el tipo de gobierno.

El ciclo económico de muchos países latinoamericanos, especialmente los de economía mixta, está altamente influido por el ciclo político. En México, por ejemplo, en el primer año del sexenio presidencial es común que la economía se desacelere en forma significativa, dada la contracción inicial de la inversión pública; los años segundo y tercero, en general son expansionarios. Aun en Estados Unidos, con su régimen de economía privada, la asunción de un nuevo Presidente conduce a que la inversión privada sea más lenta, dada la incertidumbre que origina el plan económico de la nueva administración (por ejemplo, Kennedy y Carter y sus controversias con los industriales del acero y del petróleo, respectivamente). En muchos casos resulta evidente que ahora el ciclo económico depende más de los cambios políticos internos que de las fluctuaciones en los mercados internacionales. Esto parece ser claro especialmente para el período 1950-1970, sobre todo en las economías más cerradas y diversificadas; es lo que pasa dentro, y no fuera de la casa, lo que más afecta el proceso económico.

El contenido del programa económico, y sus mutaciones, quizá es lo que más influye en la economía de los países. No parece exagerado afirmar que gran parte de la historia económica reciente de las economías latinoamericanas analizadas en el simposio puede explicarse por la aplicación alternada de planes expansionarios y planes de estabilización. Los gobiernos con programas populistas que buscan la justicia económica distributiva mediante la generación rápida de empleo, de incrementos significativos en los salarios nominales y de programas de asistencia social, pese a que sus objetivos son loables, generalmente acaban introduciendo serios desequilibrios externos, de precios y financieros, que en ocasiones destruyen los objetivos originales de justicia social. En consecuencia, el mismo grupo de gobierno o su sucesor, constitucional o revolucionario, cambia de frente e introduce un programa de estabilización que normalmente reduce el gasto fiscal, hace austeras las políticas salariales y monetarias, desacelera la economía y eleva tanto la desocupación como la subutilización de la planta instalada.

La duración del programa estabilizador depende del tipo de gobierno. Si no está sujeto a un proceso electoral recurrente, como en los casos de las juntas militares, el programa puede tener una vida relativamente larga. Si, por el contrario, el gobierno está sujeto a la celebración de elecciones, la estabilización es más efímera. Después de ellas puede esperarse el retorno a un programa de contenido expansionario, con propensión inflacionaria y al desequilibrio externo.

Esta alternación del contenido de los programas económicos se ha manifestado en América Latina, tanto en las economías mencionadas como en otras intermedias, en lo relativo al tamaño y grado de apertura al exterior. Los programas de expansión y sus consecuencias se dieron en Argentina, con Perón; en Brasil con Quadros; con Velasco Alvarado, en Perú; en Chile, con Allende; en México con Echeverría. Los de estabilización ya se han aplicado, o apenas se inician en este momento, en los mismos cinco países. En los países socialistas ya no se pone el acento en el crecimiento máximo, sino en el equilibrado. En Estados Unidos Carter pretende equilibrar el presupuesto para 1980.

La pregunta que desde luego se antoja es: ¿no es posible lograr un justo medio que, manteniendo un equilibrio razonable, permita mejorar la ocupación y la distribución del ingreso y modernizar el aparato productivo sin generar desbalances inflacionario y externo? Aunque en las economías desarrolladas este equilibrio se considera generalmente posible, con base en la adopción de una tasa de crecimiento real, moderada y sostenida, en las economías de los países de América Latina no parece ser ésta la norma. Considerando el corto o el mediano plazo —menos de medio decenio—, la respuesta parece ser negativa, especialmente en aquellos países donde la presión demográfica es elevada, o la presión de ideas y sentimientos políticos impone programas con altas miras de industrialización y justicia social. La tasa real de crecimiento necesaria para resolver el problema del empleo es superior a la requerida para mantener los equilibrios externo y de precios. Parece ser, entonces, que la tendencia es que mientras más ambiciosos sean los objetivos sociales igualitarios, y se pretenden lograr con mayor prontitud, más se confirma la impotencia de los sistemas económicos nacionales de índole democrática (sujetos a rotación electoral) para lograrlos y mantener, al mismo tiempo, los equilibrios externo y de precios. Esto sucede especialmente en los países pobres en recursos naturales, a medio modernizar, en los cuales se considera más obvia la necesidad de cambiar hacia tipos de gobierno más autoritarios. Desafortunadamente, esos gobiernos tampoco parecen ser capaces de alcanzar objetivos sociales, con equilibrio, en forma acelerada. Es sólo en el largo plazo (medio decenio o más) cuando la respuesta puede ser positiva, siempre y cuando los recursos nacionales y la

demografía se combinen favorablemente con el programa económico.

La pugna entre los programas económicos expansionista y estabilizador constituye una lucha de tesis y antítesis que se conoce bajo diferentes nombres específicos. Algunos de ellos son neokeynesianismo *vs.* neoclacisismo económico; estructuralismo *vs.* monetarismo; desarrollo máximo *vs.* desarrollo equilibrado, etcétera.

Dos hechos que han venido a reforzar la influencia de la política en la economía han sido la adopción casi universal de los principios fiscales de Keynes para acelerar o desacelerar la economía, y de Marx en cuanto a la participación directa del gobierno en el proceso económico. Un gobierno que tenga bajo su control 50% o más de la inversión del país, así como programas ambiciosos de expansión, tiene mucho más peso en la determinación del rumbo de la economía. Esto ha hecho que la historia económica dependa más y más de la historia política y del ideario y conocimientos del grupo gobernante.

Un elemento adicional de desequilibrio que generan las economías mixtas, durante la etapa de rápida aplicación del principio expansionista, es la retracción o estancamiento de la inversión privada. Cuando la expansión de la inversión pública está acompañada con la manifestación de intenciones, veladas o abiertas, de socializar aún más la economía, la inversión privada tiende a desacelerarse. Este fenómeno se ha manifestado universalmente en el pasado y es posible que tienda a agudizarse en el futuro, dada la creciente facilidad en los movimientos internacionales de recursos financieros y personas. En estos casos, el gobierno se ve obligado a acelerar aún más su programa de inversión. Con ello el sector privado ve confirmadas sus sospechas, lo que genera una mayor desaceleración de la inversión privada y alienta las fugas de capital.

Por otra parte, en aquellos países donde el grupo gobernante controla, digamos, 50% de la inversión total, resulta obvio que la inversión privada es básicamente un complemento o derivación de la pública. En estas circunstancias, no es realista esperar que la privada sea motora, de la misma manera que no es realista esperar que en un país de monocultivo el resto de la economía sea dinámico, cuando el producto principal no lo es.

CONCLUSION

La anticipación de Kalecki, el eminente economista polaco, hecha hace casi 35 años, del advenimiento del ciclo político en lo económico, parece estarse confirmando plenamente.[5] La esperanza de algunos economistas, de mediados de los años sesenta, de la extinción del ciclo económico mediante la aplicación de los métodos keynesianos, ha resultado sólo parcialmente válida. La alternación de programas económicos expansivos y estabilizadores ha creado, en las economías en desarrollo más cerradas y autárquicas de América Latina, un ciclo económico que puede clasificarse como aritificial, nacido de la impaciencia política por el desarrollo mismo. Lo paradójico es que la introducción de los instrumentos fiscales que dieron pie a la esperanza de moderar el ciclo se han utilizado para recrudecerlo. Una nueva variedad cíclica parece haberse generado precisamente por la forma en que se ha aplicado el remedio anticíclico.

El programa expansionista generalmente no es un esfuerzo anticíclico para contrarrestar una recesión, sino que va mucho más allá. Pretende resolver problemas estructurales mediante un método fiscal deficitario en extremo. Al actuar en esta dirección, acentúa la inestabilidad económica, generando inflación y déficit externos difícilmente financiables. El terreno queda así abonado para la aplicación de una corrección deflacionaria prolongada, la cual, dada la dificultad política para aplicarla, endurece o divide a los grupos gobernantes de índole democrática, o lleva a un cambio político hacia gobiernos autoritarios. En los casos en que la corrección se da a medias, la inestabilidad económica se hace crónica.

Si esta hipótesis cíclica es correcta, el remedio, en principio al menos, parece claro. No resulta aconsejable utilizar un programa anticíclico de corte keynesiano para corregir, a corto plazo y de modo significativo, los problemas de modernización y de distribución del ingreso, especialmente cuando aún predominan los cuellos de botella del sector tradicional. Lo más que puede esperarse de un programa de esta índole es que se suavicen las fluctuaciones del sistema, sin disparar los mecanismos de inflación y desequilibrio externo. Paralelamente, esto ayuda a mejorar, poniéndola sobre bases más firmes, la participación del ingreso laboral en el mediano y el largo plazos. Para acelerar el proceso redistributivo en el contexto del largo plazo deben proponerse y explorarse nuevas medidas "estructurales". Una "veta" digna de exploración parece encontrarse en la gama de propuestas europeas y norteamericanas relativas a la difusión masiva de la propiedad de la nueva inversión.[6]□

5. La explicación que da Kalecki a la contracción cíclica o al estancamiento económico no coincide plenamente con la propuesta aquí. Kalecki atribuye a la presión política organizada de los grandes industriales el hecho de que el grupo gobernante no adopte un programa de pleno empleo en forma sostenida. Un grupo de gobernados, por tanto, es el origen político del subempleo o la recesión. Aunque esta explicación tiene, sin duda, su relevancia en el caso latinoamericano, consideramos que sólo es una parte del mecanismo. La parte que aquí destacamos es el sobreestímulo económico sostenido, atribuible a los gobernantes, del cual hay evidencias en la historia económica del continente. El artículo original de Kalecki "Political Aspects of Full Employment", publicado en 1943, puede encontrarse en *Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1975, pp. 138-145.

6. Para Europa véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), *Workers' Negotiated Savings Plans for Capital Formation*, París, 1970; para Estados Unidos véase S.M. Speiser, *A Piece of the Action*, Van Nostrand, Nueva York, 1977. La reciente experiencia brasileña en esta área, aunque no es idéntica a las propuestas en estas dos referencias, también debe consultarse.